

EL MUNDO, MIÉRCOLES 26 DE MARZO DE 2003

## Rechazo en el Congreso al uso de embriones para la investigación

► El PP votó en contra de una proposición de ley socialista para que se permita investigar con los embriones sobrantes de la reproducción asistida

ROSA M. TRISTAN

MADRID.- La posibilidad de que los 35.000 embriones congelados que existen en España, sobrantes de la reproducción asistida, sean utilizados para la investigación fue rechazada ayer en el Congreso de los Diputados con 166 votos en contra del Partido Popular. El Pleno del Congreso debatió una proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, para modificar la actual normativa, con objeto de que se permita trabajar a los científicos con estos embriones.

El diputado socialista Jaime Lissavetzky defendió en la tribuna la necesidad de dar una utilidad a estos embriones, que llevan ya más de cinco años congelados y no pueden servir para la reproducción asistida, siempre bajo el control de las administraciones.

Lissavetzky recordó que esta línea de investigación ha sido defendida por 70 premios Nobel, por asociaciones de afectados con enfermedades degenerativas, por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, por el Comité Asesor de Ética para estos temas y por el 58% de los españoles, según el último Eurobarómetro.

Respecto al último informe del Comité de Ética, el diputado recordó que fue creado por el Gobierno para que informara sobre este tema y que ahora ha recomendado modificar la legislación para que se pueda investigar con células embrionarias, como proponía el PSOE. «Ahora dicen que su informe no es vinculante, pero así ya hemos perdido tres años y no queremos perder ni un minuto más para investigar», señaló.

### «Desprotección»

La diputada del PP Blanca Fernández de Capel calificó de «miserable» la argumentación del PSOE al defender su iniciativa y aseguró que la propuesta socialista era «un pretexto para la investigación sin tener en cuenta la desprotección en la que podrían quedar los embriones humanos». Fernández de Capel insistió en que el informe del Comité de Ética era sólo «consultivo» y aludió a la necesidad de contar con una directiva comunitaria que oriente en estos casos.

Por parte de Izquierda Unida, la diputada Marisa Castro justificó la necesidad de cambiar una ley que, según sus palabras, «se ha quedado obsoleta» y en similares términos se expresaron los portavoces de la Chunta Aragonesista, Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Galego. Este último aludió al conflicto de Irak al señalar que «en vez de ayudar a matar personas sería mejor ayudar a salvar vidas».

Como en anteriores votaciones sobre este asunto, el portavoz de CiU señaló que su grupo se abstenía y reclamó un debate profundo en una subcomisión parlamentaria que se cree para ello, así como un pacto de Estado.